



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

RELACIÓN DE ACUERDOS

Órgano de gobierno

Pleno

Lugar

Madrid

Fecha

04 de marzo de 2021

Acuerdos adoptados

Uno.- Aprobar el acta de la sesión plenaria ordinaria del día 25 de febrero del año 2021.

Dos.- Quedar enterado del cumplimiento de los acuerdos adoptados en dicha sesión plenaria.

Tres.- Quedar enterado de los informes de las comisiones y vocales sobre actividades del Consejo en los términos que figuran en el acta.

Cuatro.- Retirar del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-1 de 16 de febrero de 2021) para provisión de una plaza de magistrado/a de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, turno especialista.

Cinco.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-2 de 16 de febrero de 2021) para provisión de una plaza de magistrado/a de la Sala Primera del Tribunal Supremo, turno general, por jubilación del anteriormente nombrado, Eduardo Baena Ruiz, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en sesión celebrada el 4 de marzo de 2021, acuerda nombrar magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo a Antonio García Martínez.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado. Sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, la trayectoria profesional de Antonio García Martínez acredita sobradamente su aptitud e idoneidad para ser promovido a la máxima categoría de magistrado del Tribunal Supremo.

El candidato designado ingresó en la Carrera Judicial el 08.02.1990, y cuenta con una antigüedad de más de treinta y un años en la misma y más de veintinueve en la categoría de magistrado. Destacan sus más de veintiún años de servicio en órganos judiciales colegiados del orden jurisdiccional civil.

Como juez estuvo destinado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Mieres (05.03.1990 a 20.11.1991) y en el Juzgado de Primera



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Instancia e Instrucción núm. 3 de Getxo (02.12.1991 a 16.01.1992). Una vez que ascendió a la categoría de magistrado sirvió, por orden cronológico, como magistrado en el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Bilbao (01.02.1992-29.09.1999), en la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya (01.10.1999-11.02.2003) y, finalmente, en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (18.02.2003 a la actualidad).

El candidato nombrado también acredita una notable experiencia en órganos gubernativos. Así, fue miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1999 a 2009.

En la designación del candidato nombrado, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, el alto grado de conocimiento y experiencia en las materias propias del orden civil, adquiridos a lo largo de su trayectoria profesional mediante el ejercicio de la jurisdicción. En este sentido, tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

Las cinco resoluciones destacadas, así como los motivos de su relevancia, son las siguientes:

1ª) ECLI:ES:TSJPV:2019:2ª. El auto establece de forma clara, completa y precisa las premisas que hay que tener presentes a la hora de formalizar un recurso de casación.

El tribunal recuerda que el de casación es un recurso cuyo carácter extraordinario justifica la exigencia de requisitos más estrictos e incluso de un mayor rigor formal que en los recursos ordinarios, y que por ello está sujeto a determinadas exigencias técnicas derivadas de las normas que lo regulan y que han sido expuestas en los Acuerdos de la Sala Primera del TS de 12 de diciembre de 2000, de 30 de diciembre de 2011 y de 27 de enero de 2017.

Señala que ha asumido y aplicado como propios, desde el primer momento, en los recursos de casación atribuidos a su conocimiento, los criterios de admisión que se plasman en dichos acuerdos, que forman parte del sistema de recursos, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

2ª) ECLI:ES:TSJPV:2020:382. La sentencia establece doctrina jurisprudencial en relación con la norma del inciso segundo del artículo 12.5 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores.

La Audiencia Provincial afirma en la sentencia que es objeto del recurso de casación que la prórroga contemplada en el art. 12.5 LRFPV "[d]ebe ser solicitada en la forma establecida en él, esto es, con posterioridad a la resolución que otorga el uso del domicilio familiar, y siempre seis meses antes de que finalice el plazo concedido" añadiendo que "[D]icha prórroga se habrá de pedir, lo más tarde, seis meses antes del vencimiento del término fijado [...]".



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

A partir de esta interpretación y considerando como hechos relevantes del caso que la sentencia atributiva del uso de la vivienda familiar se dictó el 20 de junio de 2017 y que, por lo tanto, aquel finalizaba el 20 de junio de 2018, que fue cuando se interpuso la demanda solicitando su prórroga, la Audiencia concluye que: "[C]omo se afirma en la resolución recurrida, la prórroga del uso del domicilio familiar, al amparo del art. 12.5 de la LRFPV, debió ser solicitada seis meses antes del vencimiento del plazo que se había fijado para dicho uso, y puesto que la demanda fue presentada transcurrido ese plazo debe ser rechazada por apreciarse caducidad de la acción ejercitada".

El tribunal de casación discrepa porque la interpretación que efectúa la Audiencia Provincial del artículo transcrito es contraria al tenor del precepto conforme a una interpretación gramatical del mismo. La expresión "como máximo" indica el límite superior en el cálculo de una magnitud. Y su contraria, la expresión "como mínimo", el límite inferior.

3ª) ECLI:ES:TSJPV:2018:2641. El recurso de casación se interpone contra la sentencia de la Audiencia Provincial que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirma la sentencia del JPI que estimó la demanda y declaró: (i) la nulidad parcial del testamento otorgado por una persona designando como única heredera de sus bienes, derechos y acciones a una entidad religiosa en lo relativo a los bienes inmuebles titularidad del causante con naturaleza troncal para su hermano; (ii) así como la nulidad parcial de la escritura de aceptación y adjudicación de la herencia del causante otorgada por dicha entidad en lo que se refiere a dichos bienes; (iii) y también, la nulidad y cancelación de los asientos, inscripciones o anotaciones registrales que en relación con los mismos se hubieran podido producir durante la tramitación del procedimiento.

La parte demandada alega para oponerse: (i) que el causante de la herencia, hermano del demandante, tenía vecindad civil guipuzcoana en el momento de su fallecimiento; (ii) que el causante nunca llegó a tener en vida vecindad civil aforada puesto que su padre nació en Durango y su madre en Amorebieta, poblaciones ambas sujetas al derecho común, naciendo él también en Durango, lugar en el que residió hasta que la familia se trasladó a vivir a San Sebastián, donde falleció; (iii) y que el demandante, hermano del causante, tampoco ostenta la condición de aforado ni de pariente tronquero.

En el recurso se plantea que las normas civiles forales del País Vasco son contrarias a la CE en sus artículos que regulan la igualdad por razón del territorio en su título VIII y suponen una restricción a la libre circulación de capitales y da lugar a una discriminación objetivamente injustificada, dado que hace depender la aplicación de una limitación a la capacidad de disponer de un bien inmueble del lugar de residencia del causante y del causahabiente en el momento de su adquisición o del lugar en el que el bien objeto de sucesión está sito. El Tribunal desestima el recurso.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

4ª) ECLI:ES:TSJPV:2012:1218. Se fija la doctrina de que las aportaciones realizadas a una Sociedad Cooperativa que tienen carácter obligatorio, se imponen a los socios por el hecho de serlo y se integran en el capital social, en lo relativo al régimen de su reembolso, se equiparan a las aportaciones al capital en sentido propio o estricto y no pueden considerarse en ningún caso aportaciones financieras subordinadas, por lo que se les aplica el régimen de los arts. 59 a 63 y no el de los arts. 57.5 y 64 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. La relevancia de la resolución, dice el candidato, es manifiesta desde la perspectiva de la capitalización y la financiación de las SSCC, dos de sus grandes problemas.

Lo que se discute en el proceso es si las aportaciones objeto de la demanda ("aportaciones patrimoniales" para las demandantes y "aportaciones financieras subordinadas" a criterio de la demandada) han de ser reembolsadas en el plazo máximo de cinco años a partir de la baja de las demandantes como socias de la demandada (conforme al artículo 13 de los Estatutos sociales y 63 de la Ley 4/1993, de 24 de julio, de Cooperativas de Euskadi) o bien, como opone la demandada, si su devolución tan solo procede o a su vencimiento, coincidente, a tenor de lo fijado en los acuerdos de emisión, con la liquidación de la Cooperativa, o en el momento anterior en que así lo acuerde la demandada (por decisión de la Asamblea General) con los titulares de las aportaciones conforme a lo previsto legalmente y por los acuerdos de emisión.

5ª) ECLI:ES:TSJPV:2011:15. El recurso de casación se interpone contra la sentencia de apelación que revoca la de primera instancia en el sentido de estimar parcialmente la demanda interpuesta declarando rescindido por lesión en más de la cuarta parte el cuaderno particional impugnado y estableciendo al propio tiempo: que ninguna donación hecha a los herederos forzosos sería colacionable; que el local de negocio ubicado en la calle X se valoraba en la suma Y; y que los herederos demandados podrían optar entre indemnizar el daño o consentir una nueva partición.

El tribunal estima el recurso de casación, dejando sin efecto la declaración de rescisión del cuaderno particional; la de que ninguna donación hecha a los herederos forzosos será colacionable y la de que los herederos demandados podrán optar entre indemnizar el daño o consentir una nueva partición.

Se diferencia entre "donaciones computables" y "donaciones colacionables":

1) que aquellas donaciones en relación con las cuales no medie o no se haga por el donante apartamiento expreso sí deben ser computadas (para el cálculo de la legítima) y colacionadas (para considerarlas en la cuenta de partición) y 2) que aquellas donaciones en relación con las cuales sí medie o sí se haga por el donante apartamiento expreso no deben ser computadas (para el cálculo de la legítima) ni colacionadas (para considerarlas en la cuenta de la partición).



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Al margen de su actividad jurisdiccional, el Pleno ha valorado que el candidato nombrado ha realizado una amplísima actividad docente y una fructífera actividad científica, muy resumida en los siguientes datos:

El candidato nombrado ha sido profesor de la Universidad de Deusto (03.09.2001 a 01.09.2006) y de la Universidad UPV/EUH del País Vasco (01.09.2016 a 02.09.2019). Además, acredita 100 ponencias y conferencias en jornadas, cursos y seminarios organizados por diversas instituciones y organismos nacionales, públicos y privados, y 5 actividades docentes a nivel internacional.

Entre la actividad discente consta haber superado los cursos de doctorado por la Universidad de Deusto en el periodo 1995/97.

La producción científica del candidato se manifiesta en 40 artículos publicados, entre ellos *"El juicio verbal del art. 328 LH. Cuestiones procesales"*, en La revisión judicial de la calificación registral, La Ley, 2013; *"La Jurisprudencia: 25 años del Tribunal Superior de Justicia en materia de Derecho civil vasco"*, en El Derecho Civil Vasco del S. XXI, Parlamento Vasco, Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Vitoria-Gazteiz, 2018; *"Criterios de admisibilidad del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal"*, Aula virtual UNED, 2016 a 2020; *"Memoria y verdad"* en Cuadernos Digitales de Formación, CGPJ, 2019.

Igualmente, acredita 25 actividades de colaboración con el CGPJ y otras instituciones:

La colaboración con el CGPJ se plasma, entre otras, en las siguientes actividades: i) Tutor de jueces en prácticas del 01.02.1992 al 29.09.1999; ii) coordinador territorial de tutores de jueces en prácticas promociones 53ª y 54ª; iii) director y coordinador de la formación de jueces sustitutos durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2004; iv) vocal del tribunal calificador de las primeras pruebas de especialización en las materias propias de los órganos de lo mercantil (2004); v) director, coordinador o ponente en 14 cursos organizados por el CGPJ, entre ellos curso *El entorno del juez* (2015), jornada *sobre ética judicial* (2018).

También ha sido vocal de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2012) y miembro del Grupo de Trabajo *Reforma de la organización de la Justicia* (2015).

Todo lo expuesto hace de Antonio García Martínez el magistrado más idóneo, de entre todos los/as solicitantes propuestos/as, para el desempeño de la plaza convocada.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez, Rafael Mozo Muelas, Clara Martínez de Careaga García y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Seis.- Retirar del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-3 de 16 de febrero de 2021) para provisión de una plaza de magistrado/a de la Sala Primera del Tribunal Supremo, turno general, por jubilación del anteriormente nombrado, Antonio Salas Carceller.

Siete.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-1 de 14 de septiembre de 2020) para provisión de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, vacante por jubilación del anteriormente nombrado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 4 de marzo de 2021, acuerda nombrar presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al magistrado Ignacio José Subijana Zunzunegui.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado.

1.- Ignacio José Subijana Zunzunegui ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 08.02.1990. Ostenta el nº 1274 del escalafón general de la Carrera Judicial cerrado a 31.03.2018.

Entre sus destinos destacan por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión) como juez: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Azpeitia (05.03.1990 a 01.04.1992); y como magistrado: Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Cádiz (11.04.1992 a 06.09.1995), Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Donostia-San Sebastián (25.09.1995 a 02.11.1998), Juzgado de lo Penal núm. 2 de Donostia-San Sebastián (09.11.1998-09.07.2002), Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa (15.07.2002-15.09.2010), presidencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y de su Sección 1.ª (17 de septiembre de 2010 a la actualidad)

El candidato nombrado tiene una notable experiencia en órganos colegiados a la vista de sus destinos, principalmente, en la Audiencia Provincial de Cádiz u de Gipuzkoa (entre ambas cerca de 22 años)

2.- Por lo que se refiere a las aptitudes de gobierno, el candidato nombrado cuenta con experiencia gubernativa muy relevante: Ha sido Decano del partido judicial de Azpeitia (05.03.1990 a 1992) y del partido de San Sebastián. Presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa (16.09.2010 a la actualidad); miembro nato de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (15.10.2010 a la actualidad) y miembro electo de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (7 años).

El candidato nombrado tiene un perfecto conocimiento de la situación del Tribunal Superior de Justicia y de los órganos del territorio, lo que igualmente ha puesto de manifiesto tanto en su programa de actuación como, posteriormente, en su comparecencia. En efecto, presenta un programa de actuación que, con carácter previo, expone las respuestas en relación con toda la extensión y problemática que ha planteado la pandemia del Covid y, por otro lado, realiza



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

una auténtica radiografía del mapa judicial en el País Vasco, detallando las estadísticas de órganos judiciales y demarcaciones, y proponiendo ciertas medidas de refuerzo, la creación de determinadas unidades judiciales y la adopción de otras medidas organizativas para la mejora de la prestación jurisdiccional sin necesidad de refuerzo.

Por otro lado, plantea la mejora de la “administración de la administración de justicia” en los siguientes ámbitos.

.- La justicia digital: Que de forma definida los escritos de inicio y trámite se puedan enviar de forma electrónica por los operadores jurídicos en todo el territorio; que se ofrezca a los jueces un escritorio con acceso cómodo a los procedimientos judiciales; que se mejore la formación de los jueces, y sobre todo su asistencia posterior; que se promueva un trabajo colaborativo en la consecución de la calidad de los datos digitales que permita que la información sea creada, protegida, compartida y publicada de acuerdo con los más altos estándares existentes; y, finalmente, se exploren las posibilidades que ofrece el trabajo en remoto.

.- El desarrollo del modelo legal de oficina judicial: i) Una plena admisión del carácter instrumental de las Oficinas Judiciales respecto a la actividad jurisdiccional de los Jueces o Tribunales con independencia de que se trate de unidades que presten apoyo directo a jueces y magistrado en el ejercicio de sus funciones o de servicios comunes procesales que asumen labores centralizadas de gestión y apoyo a varios Juzgados o Tribunales en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. ii) Un reconocimiento claro de la jurisdiccionalidad en el Servicio Común de Ejecución (la existencia de un sector inmune a la potestad jurisdiccional no es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva; iii) Una integración como Servicio Común del soporte administrativo preciso para la gestión procesal de la Justicia restaurativa y la mediación en dos momentos definidos: la derivación por Jueces y Tribunales — fase de apertura en el procedimiento del espacio de comunicación- y la incorporación del resultado obtenido. Artículo 438.3 LOPJ; iv) Una distribución de la dotación de personal entre las Unidades de Apoyo Directo y el Servicio Común de Ejecución que permita el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a cada una de estas estructuras organizativas.

El candidato nombrado también expone un elenco de buenas prácticas procesales en relación con la violencia de género, personas vulnerables, personas con discapacidad intelectual, menores y mayores; y plantea medidas en materia de modelo de justicia alternativo al adversal (justicia restaurativa y la mediación intrajudicial) y en el sistema adversarial (las conformidades penales).

Finalmente, propone medidas en materias de. i) Justicia bilingüe; ii) relaciones con la administración prestacional; iii) colaboración con el sistema educativo, universitario y profesional; y iv) comunicación con sociedad.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1ª) Sección Penal, Rollo jurado 1091/2011, de 03.02.2014, sobre asesinatos y amenazas, confirmada por la STS de 01.10.2014. Padre acusado de amenazar a su exmujer y que asesina a la hija común, de un año y siete meses de edad, como venganza por la separación, introduciéndola en el mar hasta que se ahogó.

2ª) Sección primera, proceso abreviado 1001/2016, de 22.12.2016, sobre tentativa inidónea de homicidio. Tratamiento de la tentativa inidónea de homicidio por una persona que padece una anomalía o alteración psíquica. Era un caso en el que el detenido por los daños en una óptica, que padece una esquizofrenia paranoide residual, aprovechó que era trasladado del calabozo a los servicios, para apoderarse de la pistola de una de las policías que lo custodiaban, y, desconociéndose que estaba descargada, accionó en varias ocasiones el gatillo del arma mientras encañonaba a la agente policial.

3ª) Sección primera, proceso abreviado 1005/2018, de 29.05.2019, sobre delito medioambiental por causación de ruidos, pendiente de resolución por el Tribunal Supremo. Se plantea, además de la responsabilidad de los diferentes explotadores de un bar en el que se producía ruidos de madrugada que incidían en la salud psicofísica de los moradores de las viviendas colindantes, la responsabilidad omisiva de los dos alcaldes que conocían esta situación y, sin embargo, no adoptaron resolución alguna dirigida a su neutralización.

4.- Así mismo, el Pleno ha valorado que Ignacio José Subijana Zunzunegui acredita numerosas actividades de docencia y de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y otros organismos, entre las que han de destacarse las siguientes:

Es Fiscal en excedencia desde 1989 y profesor en el Instituto Vasco de Criminología. Asimismo, ha sido profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco (1991-1992).

Ha sido director de 9 cursos, tales como "*La detención*" y "*La violencia de género en menores y adolescentes: aportaciones a un futuro con igualdad de género.*" Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco UPV-EHU (2017 y 2019, respectivamente).

Ha participado en 31 actividades docentes en colaboración con el CGPJ con, entre otras, las siguientes ponencias: "*Acoso escolar: perspectiva victimológica y criminológica*", Encuentro entre profesionales de la judicatura y de la medicina, Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial; "*La mediación penal intrajudicial*", Curso de Formación de jueces, Escuela Judicial; y "*El papel del juez en la mediación*", Jornadas de mediación, Consejo General del Poder Judicial-Consejo General de la Abogacía Española; todas ellas en 2017.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Desde una perspectiva discente, el candidato nombrado es Doctor en Derecho Penal por la Universidad del País Vasco, 2004 (sobresaliente cum laude) y Diplomado en Criminología por la Universidad del País Vasco, 1989.

Es autor de 2 libros y de 94 artículos doctrinales. Concretamente, las obras son *"El principio de protección de las víctimas en el orden jurídico penal. Del olvido al reconocimiento"*, Comares, Granada, 2006; y *"Justicia restaurativa y Terapéutica: hacia innovadores modelos de Justicia"*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018. Entre los artículos resaltan *"Los modelos de inejecución condicionada de la pena de prisión"*, Cuadernos penales José María Lidón, La ejecución de las penas, nº 15, 2019; *"La perspectiva de género en la prueba de los delitos de violencia del hombre sobre la mujer"*, Revista del Colegio de Psicología de Bizkaia, nº 51, 2020 y *"El estatuto jurídico de las personas investigadas/acusadas con discapacidad por trastorno mental"*, Boletín Penal, Editorial Sepin, 2020.

Por otro lado, ha sido ponente en 257 cursos organizados por instituciones y organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, diversos al CGPJ. Además, acredita la participación en actividades internacionales organizadas en colaboración con el CGPJ y en dos grupos de trabajo del CGPJ.

Todo lo expuesto hace de Ignacio José Subijana Zunzunegui el magistrado más idóneo para el desempeño de la plaza.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez, Rafael Mozo Muelas, Clara Martínez de Careaga García y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Ocho.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-1 de 2 de julio de 2020) para provisión de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, vacante por finalización del mandato del anteriormente nombrado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 4 de marzo de 2021, acuerda nombrar presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al magistrado Juan Luis Lorenzo Bragado.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado.

1.- Juan Luis Lorenzo Bragado ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 21.06.1989. Ostenta el nº 1116 del escalafón general de la Carrera Judicial cerrado a 31.03.2018.

Entre sus destinos destacan por orden cronológico desde la fecha de toma de posesión) como juez: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (13.07.1989-15.01.1991); como magistrado: Juzgado de lo Social núm. 2 de Vitoria-Gasteiz (1.02.1991-7.01.1993); Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Palencia (26.01.1993-12.12.1995); Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Santa Cruz de Tenerife (2.01.1996-30.12.2008); Adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (7.01.2009-8.05.2009); Registro Civil



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Exclusivo número 1 de Santa Cruz de Tenerife (desde 15.05.2009 hasta la actualidad).

2.- Por lo que se refiere a las aptitudes de gobierno, el candidato nombrado cuenta con experiencia gubernativa muy relevante: Decano electo de los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife (desde el año 2001 a la actualidad) y miembro electo de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (2005 a 2009 y 2014 a la actualidad).

El candidato nombrado tiene un perfecto conocimiento de la situación del Tribunal Superior de Justicia y de los órganos del territorio, lo que igualmente ha puesto de manifiesto tanto en su programa de actuación como, posteriormente, en su comparecencia.

Estas propuestas de solución son de diferente índole:

En relación con los aspectos gubernativos de la presidencia del TSJ y funcionamiento de la Sala de Gobierno.: convocatoria de las reuniones con antelación suficiente; designación de ponente, cuando sea preciso, con carácter previo a la inclusión del asunto en el orden del día; mantener el formato actual de celebración mediante videoconferencia; justificación de ausencias; mejorar la tramitación de los expedientes; dirigir y supervisar los trabajos para la confección de la memoria anual; elaborar informes estadísticos trimestrales; ampliación del gabinete técnico de presidencia; integración de los decanos exclusivos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en la Sala de Gobierno.

En relación con la actividad de la Comisión mixta; reuniones dos veces al año.

En relación con las medidas de refuerzo y las propuestas de creación de nuevos órganos judiciales.; necesidad de analizar todas las medidas de refuerzo existentes.

En relación con la situación que afecta a los JVSM; estudiar la posibilidad de creación de un segundo JVSM en Arona; comarcalización en los partidos del norte de la isla de Tenerife; creación de las oficinas de atención a las víctimas.

Igualmente, el candidato designado desarrolla medidas organizativas en materia de demarcación; con los denominados juzgados de cláusula suelo; nueva oficina judicial; justicia municipal; causas complejas por corrupción; fomentar el uso de la UACC.

También, se destacan medidas que adoptaría el candidato para reducir la litigiosidad donde destacan las siguientes: mediación; promoción de la figura del coordinador de responsabilidad parental; conformidades en el ámbito penal; actuaciones en relación con el registro de asuntos; unificación de criterios jurisdiccionales, especialmente en cuestiones procesales.

En cuanto al personal Judicial el candidato nombrado considera pertinente adoptar las siguientes medidas, en materia de promoción de la igualdad; actuaciones frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia en la carrera



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

judicial; promoción de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional en la Carrera Judicial, en todas las formas de acoso y violencia en la carrera judicial; jueces/as sustitutos/as; prevención de riesgos laborales; formación judicial continua

Finalmente, también considera importante adoptar otras medias en relación con las siguientes cuestiones: Portal de transparencia; comunicación; fomento del uso del lenguaje inclusivo; Educando en Justicia; y relaciones institucionales

El candidato nombrado dedica el último apartado de su plan de actuación a tratar un tema fundamental como son las nuevas tecnologías donde refleja varias cuestiones: El expediente judicial electrónico; la concienciación, motivación y formación en el uso de las nuevas tecnologías; el cuadro de mandos integral (CMI); el uso de los esquemas de tramitación procesal y de las herramientas de tramitación guiada; los gestores de tareas; la ampliación de catálogo y difusión de servicios de la sede judicial electrónica de Canarias; la participación en la transformación cultural, a través, de la implicación en la difusión de contenidos y acuerdos a través de la Intranet de Justicia en Canarias y de mejoras en los sistemas de documentación y archivo electrónico; la formación específica en código de conducta de usuarios y protección de datos; y la justicia municipal y las nuevas tecnologías.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1.- Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santa Cruz de Tenerife de fecha 9.03.2006.

Asunto novedoso y trascendente: acceso al registro de la propiedad español de un título notarial alemán: aplicación directa del Derecho europeo y análisis del documento público alemán a la luz del principio de equivalencia de formas.

La sentencia fundamenta la decisión de dar acceso al registro de la propiedad español a ese concreto título público alemán en los principios del Derecho Comunitario en materia de libre prestación de servicios, en especial los arts. 49 y 53 del Tratado de Roma; en la aplicación de las normas de derecho internacional privado (Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales) y concluye que la escritura alemana tiene valor traditorio o, como señaló el Tribunal Supremo la escritura de compraventa autorizada por un notario alemán queda integrada en el concepto de "escritura pública" a que se refiere el artículo 1462 del Código Civil español.

2.- Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santa Cruz de Tenerife de fecha 22 de febrero de 1999.

En palabras del propio candidato nombrado, la cuestión abordada en la sentencia (repercusión a las estaciones de servicio en exceso del impuesto especial de carburantes por parte de las distribuidoras) fue muy controvertida



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

por aquellas fechas en los tribunales de Canarias, dando lugar a numerosos procesos con pronunciamientos dispares.

La decisión del Juzgado, a pesar de la revocación por parte de la Audiencia Provincial, fue confirmado por el Tribunal Supremo una vez casada la sentencia de apelación, quedando establecida como doctrina jurisprudencial la competencia civil para conocer de esta clase de litigios, al corroborar el Tribunal Supremo otro pronunciamiento previo, STS de 31 de mayo de 2006.

3.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de fecha 13.05.2015.

La sentencia reseñada estima parcialmente el recurso de apelación contra la resolución de primera instancia y aplica al caso concreto la más reciente doctrina del Tribunal Supremo en materia de alimentos en favor de hijos menores de edad con la particularidad de que, en el caso de autos, el obligado al pago se hallaba ingresado en prisión.

En definitiva, la suspensión de la obligación del alimentante que se halla en prisión no obedece a la situación de privación de libertad en la que se encuentra, sino a la absoluta carencia de medios económicos para afrontar su pago de forma temporal, criterio que ha corroborado el Tribunal Supremo en la citada sentencia de 22.12.2016, nº 752/2016, rec. 2272/2015.

4.- Así mismo, el Pleno ha valorado que Juan Luis Lorenzo Bragado otras actividades jurídicas de análoga relevancia y actividades de colaboración con el CGPJ y otras instituciones, entre las que han de destacarse las siguientes:

- Ha sido profesor en la Universidad de La Laguna (2013/14), ponente y docente en 24 cursos organizados por órganos distintos del CGPJ. Asimismo, ha participado en 17 cursos organizados por el CGPJ (bien como ponente, docente, relator, coordinador o director).

- Es autor de 3 colaboraciones en obras colectivas y de 3 artículos doctrinales, entre las que destacan "*Propuesta para un Registro Civil judicial*", en Cuadernos Digitales de Formación Colección: Cuadernos Digitales de Formación nº 27, 2017 y "*Comentario al art. 91. Demarcación y planta judiciales*", en Comentarios al Estatuto de Autonomía de Canarias, Parlamento de Canarias, BOE, 2019.

- Ha sido Presidente de la Junta Electoral de Zona de la Puebla de Sanabria (1999), Vocal de la de Palencia (1996) y Presidente de la de Santa Cruz de Tenerife (2007, 2008 y 2015).

- Desde una perspectiva docente, es Máster sobre la justicia ante los problemas del derecho de familia y participación en el curso sobre economía y contabilidad, por la Universidad de Jaén. 2017.

- Ha sido miembro de la Comisión de evaluación de magistrados suplentes y jueces sustitutos (2018-2019) y de la Comisión Mixta (2019) y ha sido coordinador territorial en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en colaboración con la Escuela Judicial (promociones 55, 58 y 59).



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Todo lo expuesto hace de Juan Luis Lorenzo Bragado el magistrado más idóneo para el desempeño de la plaza.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez, Rafael Mozo Muelas, Clara Martínez de Careaga García y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Nueve.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-3 de 13 de octubre de 2020) para provisión de Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, vacante por expiración del mandato de la anteriormente nombrada, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 4 de marzo de 2021, acuerda nombrar presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a Garbiñe Biurrun Mancisidor.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, única solicitante de la plaza convocada.

1.- Garbiñe Biurrun Mancisidor ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 30.09.1987. Ostenta el nº 712 del escalafón general, cerrado a 31.03.2018 y ha ejercido ininterrumpidamente jurisdicción durante más de 30 años.

Sus destinos por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión), como jueza: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Tolosa (28.10.1987-11.12.1989), y como magistrada: Juzgado de lo Social núm. 3 de Donostia-San Sebastián (20.12.1989-02.11.1998), Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (18.11.1998-03.09.2009), presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (10.09.2009 a la actualidad).

2.- En relación con las actividades gubernativas, la candidata nombrada, como ya se ha apuntado, ha desempeñado funciones en la presidencia Sala Social del TSJ País Vasco (2009 a la actualidad). Ha sido igualmente miembro electo Sala de Gobierno del TSJ de País Vasco (1989), y miembro electo de su comisión permanente (2016 a 2019).

La candidata presenta un programa de actuación en el que, tras exponer algunos aspectos, problemática y datos del orden jurisdiccional social en el ámbito territorial de la Sala Social Tribunal Superior de Justicia del País Vasco realiza, resumidamente, las siguientes propuestas de mejora y su planificación:

.- Medidas para la necesaria buena administración de justicia y la realización del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en la jurisdicción social: determinados refuerzos inmediatos para los tres Territorios Históricos; creación e inmediata puesta en funcionamiento de un nuevo Juzgado de lo Social en Bilbao - sería el nº 12 -; modificación de la Ley de Planta y Demarcación para la supresión del Juzgado de lo Social de Eibar y creación del sexto Juzgado de lo



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Social en Donostia; limitaciones de concurrencia de personas a los edificios judiciales y, por ende, a las vistas orales, entre otras.

- Medidas en relación a la NOJ y a los servicios comunes procesales.

- En materia de personal al servicio de la administración de justicia: Incremento de las dotaciones de personal del Cuerpo de Auxilio Judicial y de la acción formativa en materia de nuevas tecnologías, protección de datos y últimas reformas legislativas.

- Medidas concretas en medios telemáticos y aplicativos informáticos, concretamente en JustiziaBat, JustiziaSip, Justizialkus y SIRM.

- En el ámbito de la infraestructuras, con la dotación de espacios suficientes y adecuados tanto al archivo de gestión como territorial y solicitar del Gobierno Vasco la habilitación de locales fuera de los edificios judiciales para maximizar la actividad judicial.

- Medidas en relación a la Sala de Gobierno; la Secretaría de Gobierno; la relación con la ciudadanía, la transparencia, la participación ciudadana; sistemas alternativos de solución de conflictos; impulso decidido y efectividad de los protocolos de mediación y justicia restaurativa; justicia en igualdad e igualdad en la justicia: El género y la discapacidad; una justicia bilingüe para una sociedad bilingüe; condiciones profesionales, prevención de riesgos laborales, prevención del acoso; relaciones institucionales; relación con la fiscalía y la formación descentralizada.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico de la candidata nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1ª) Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3, de Donostia-San Sebastián, Auto 872/1995, de 12.02.1996, sobre calificación de la prestación de servicios; despido, confirmada por la STS de 31.03.1997, RCUD. 3555/1996.

Sentencia en procedimiento de despido, dilucidándose la laboralidad de la relación de la prestación de servicios de un fotógrafo para un medio de comunicación: desestimatoria de la excepción de incompetencia de jurisdicción y estimatoria de la relación laboral y calificando de improcedente el cese en que telefónicamente se alegó un incumplimiento del trabajador.

2ª) Sentencia, Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, demanda 13/2012, de 09.10.2012, sobre despido colectivo; derechos fundamentales: libertad sindical y huelga, confirmada por la STS de 20.09.2013 (RC. 11/2013) y STS de 18.07.2014 (RC. 11/2013).

La reciente reforma operada en la materia de los despidos colectivos por el RDL 3/2012 y la Ley 3/2012 obligaban a un particular ejercicio analítico a las Salas de lo Social, que resolvían actuando en instancia. El análisis de la denunciada vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical en el marco de los despidos colectivos.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

La Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco que analiza una demanda impugnando un despido colectivo alegando que la decisión empresarial debe de calificarse como nula por vulneración del derecho de huelga y libertad sindical o subsidiariamente no ajustada a derecho. Por la Sala de lo Social se estima la demanda y se declara la decisión empresarial nula al entender vulnerado los citados derechos pues entiende que existen indicios suficientes como para que se hubiera producido una inversión en la carga de la prueba sin que el empresario hubiera acreditado que concurra causa (económica) que justificara la decisión empresarial, por lo que declara el despido colectivo nulo.

3ª) Sentencia, Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, demanda 5/2015, de 21.05.2015, sobre despido colectivo, grupo de empresas, confirmada por la STS de 17.10.2016 (RC. 36/2016).

En el litigio se trataba de analizar si la decisión empresarial impugnada constituye o no un despido colectivo en función de la unidad de referencia, la empresa en su conjunto o el centro de trabajo afectado. Se discute como cuestión principal si los despidos objetivos realizados por la mercantil demandada encubren un "despido colectivo de hecho", por superar el número de trabajadores afectados los umbrales establecidos en el art. 51.1 ET. La sentencia analizada, aplicando la doctrina sentada por la STJUE 13-5-15 al interpretar el art. 1 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio, llega a la conclusión de que el cómputo de los trabajadores ha de hacerse en función de la plantilla del centro de trabajo y no de la empresa, lo que conlleva la superación del límite legal y que deba apreciarse la existencia de un despido colectivo viciado de nulidad. Además, la sentencia sintetiza y aplica la doctrina sobre la figura del grupo de empresa a efectos laborales.

4.- Así mismo, el Pleno ha valorado que Garbiñe Biurrun Mancisidor acredita actividades de docencia y de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, entre las que han de destacarse las siguientes:

- Ha sido profesora de la Universidad del País Vasco desde 1982 a la actualidad.

- Es autora de 11 colaboraciones en obras colectivas y 7 artículos doctrinales, tales como *"Adiós al despido objetivo por amortización del puesto de trabajo: última crónica de una vieja etapa"*, en "Tribuna Social. Revista de Seguridad Social y Laboral", nº 236-237, 2010 y *"La dinámica del empleo público temporal y del indefinido no fijo: excedencia, ascensos, permisos, traslados y consolidación de empleo"*. Actum Social. Actualidad Mementos. nº 155.

- Ha sido ponente en 19 cursos, jornadas y seminarios del CGPJ y en 83 organizadas por otras instituciones.

- Ha sido directora de 6 jornadas organizadas por el CGPJ y 2 cursos del Gobierno autonómico vasco.

- Analista Cendoj desde 2019.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Todo lo expuesto hace de Garbiñe Biurrun Mancisidor la magistrada más idónea para el ejercicio de la plaza.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez, Rafael Mozo Muelas, Clara Martínez de Careaga García y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Diez.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-5 de 13 de enero de 2021) para provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, vacante por finalización del mandato del anteriormente nombrado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 4 de marzo de 2021, acuerda nombrar presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca a José Antonio Vega Bravo.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado.

1.- José Antonio Vega Bravo ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 30.09.1987. Ostenta el nº 835 del escalafón general de la Carrera Judicial cerrado a 31.03.2018.

Entre sus destinos por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión) como juez: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Puebla de Sanabria (20.10.1987 a 31.03.1989) y Juzgado de Distrito núm. 1 de Salamanca (17.04.1989 a 28.12.1989); como magistrado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Salamanca (28.12.1989 a 01.06.2003); Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Salamanca (01.06.2003 a 16/12/2006) y Sección Única de Salamanca (26.12.2006 a la actualidad)

El candidato nombrado tiene experiencia en órganos colegiados, concretamente en la propia Audiencia Provincial de Salamanca (cerca de 14 años)

2.- Por lo que se refiere a las aptitudes de gobierno, el candidato nombrado cuenta con experiencia gubernativa relevante: Ha sido miembro electivo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (1999/2004, 2009/14 –de la comisión permanente de la Sala de Gobierno - y 2019 a la actualidad).

El candidato presenta un programa de actuación que en, en primer término, detalla la situación actual de la Audiencia y de los Juzgados a los que extiende su jurisdicción y tras detectar la diversa problemática, realiza unas propuestas de mejora que pueden resumirse en los siguientes puntos: i) Continuar participando activamente en las reuniones de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia; ii) refuerzo en la relación con los medios de comunicación y la transparencia e información pública de la actividad de la justicia en Salamanca; iii) celebración diaria de la reunión de todos los magistrados de la AP para aquellos asuntos en los que exista un riesgo de sentencias contradictorias; iv) es una necesidad que la AP trabaje en dos secciones especializadas en civil y penal



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

respectivamente; v) velar por el adecuado funcionamiento de la Secretaría en coordinación con el sr. Letrado de la Administración de justicia de esta Audiencia y con el Secretario Coordinador Provincial, para de conformidad con código de buenas prácticas, contribuir a agilizar la administración de justicia y al mismo tiempo facilitar la labor de jueces, magistrados, funcionarios, abogados y procuradores, en materias tales como teletrabajo y uso de nuevas tecnologías, acceso al punto neutro, presentación y registro de asuntos, y otras; vi) garantizar el firme compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres; vii) refuerzo en la colaboración con la Universidad, la realización de visitas programadas de escolares, mantener la colaboración con las EPJ y una relación fluida con los medios de comunicación; viii) contribuir a garantizar el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos; ix) someter a consideración de la Sala de Gobierno del TSJ y del CGPJ la aprobación de diligencias a prevención para la correcta aplicación de la Directiva 2010/64/ UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales; x) se ha propuesto por la Universidad la firma de un convenio con el CGPJ y Ministerio de Justicia, con el fin de que los juzgados y tribunales puedan servirse de la plataforma Nucleus para la realización de pruebas periciales; xi) fomentar los medios extrajudiciales de solución de conflictos; xii) esfuerzo en reforzar la relación y comunicación con órganos judiciales de la provincia, así como con los miembros de la Fiscalía, Médicos Forenses, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; xiii) es necesario ordenar los fondos bibliográficos; xiv) establecer, a través del CGPJ relaciones con los magistrados portugueses vecinos para la solución de problemas comunes en el marco de la Cooperación Judicial Internacional; y xv) participar activamente en los programas de formación de Jueces, en colaboración con la Universidad de Salamanca.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1ª) Sentencia de la AP de Salamanca, de 3/03/2020; rollo de Sala Nº 666/2019. Se trata de un préstamo hipotecario aparentemente celebrado entre consumidores, pero en dicho contrato celebrado por medio de escritura pública, mediante el fraude empleado se trata de eludir la aplicación de la legislación sobre la materia, es decir, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (LGDCU), la Ley de Condiciones Generales de la Contratación LCGC) y la Ley de Represión de la Usura.

A todo lo dicho se ha de sumar la relevancia y dificultad que supone la regulación del proceso hipotecario en nuestra LEC como proceso especial y sumario, cuyo art. 698 parece excluir la solución de los problemas relativos a la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

nulidad del título en el proceso de ejecución hipotecaria, pretensión que remite a un juicio declarativo posterior.

2ª) ROJ: SAP SA 335/2008 - ECLI:ES:APSA:2008:335. El motivo de la relevancia de esta resolución, en palabras del candidato nombrado, es doble: Por un lado, las muy numerosas partes demandantes, que coinciden en la causa de pedir, pero no en los hechos fundadores de sus pretensiones; y por otro lado, el contenido del juicio, pues si bien las pretensiones de las numerosas partes intervinientes guardan conexión en su causa de pedir, no hay coincidencia, sin embargo, en los hechos fundadores de dicha pretensión, lo que hizo sumamente complejo el juicio.

A todo ello debe añadirse la complejidad derivada de la antigüedad de numerosas pruebas documentales, que hizo necesario acudir al archivo histórico y al Centro de documentación del CGPJ, CENDOJ, sito en San Sebastián.

Estamos ante una acción declarativa y un reconvencional reivindicatoria ambas sobre bienes comunales donde la prueba del tracto sucesivo se pierde en el tiempo y no es suficiente como prueba el testamento del causante, sino que hay que probar que tenía el dominio de los bienes transmitidos.

3ª) Sentencia de la AP de Salamanca, Tribunal del Jurado, del 3 de abril de 2012.

Debido a la forma de producirse los hechos el debate ante el TJ se centró en la diferenciación entre culpa consciente y dolo eventual. En este se extendió desde la impunidad de los hechos por considerarlos un simple accidente, como sostuvo la defensa, pasando por el homicidio involuntario, propugnado por el Ministerio Fiscal, hasta el homicidio doloso y asesinato, pretendido por la acusación particular.

Todo ello ante un TJ, lo que exigió un esfuerzo para conseguir que unos hechos complejos como la muerte de un joven por atropello causada por otro joven con el que la víctima momentos antes había tenido una fuerte discusión, fuesen correctamente interpretados y valorados en términos jurídico-penales, dada la dificultad que supone diferenciar dos instituciones tan análogas y concomitantes, como son la culpa consciente y el dolo eventual.

Dificultad que se manifestó tanto en la dirección de los debates, como en la formulación de las preguntas del veredicto.

4.- Así mismo, el Pleno ha valorado que José Antonio Vega Bravo acredita el ejercicio de docencia y otras actividades jurídicas de análoga relevancia, entre las que han de destacarse las siguientes:

- Miembro de la carrera fiscal, en la que se encuentra en excedencia (1989).

- Profesor asociado de la Universidad de Salamanca, desde el curso 2000-2001 a la actualidad, en el área de derecho procesal y administrativo; profesor de práctica de proceso civil en el Máster de Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca y Colegio de Abogados y Procuradores, desde el año 2000 a la actualidad; y profesor prácticum Facultad de Derecho-Juzgados y Audiencia



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Provincial de Salamanca (convenio C.G.P.J.- Universidad de Salamanca), desde 2014 a la actualidad.

.- También ha sido ponente en un curso organizado por el CGPJ, en diversos cursos de formación a jueces de paz en el ámbito de Castilla y León, en la materia de Registro Civil; y en un curso de formación para letrados de la administración de justicia y fiscales sobre procesal civil, organizado por la Consejería de Justicia del País Vasco.

Todo lo expuesto hace de José Antonio Vega Bravo el magistrado más idóneo para el desempeño de la plaza.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez, Rafael Mozo Muelas, Clara Martínez de Careaga García y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Once.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-1 de 14 de enero de 2021) para provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Almería, vacante por expiración del mandato de la anteriormente nombrada, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 4 de marzo de 2021, acuerda nombrar presidente de la Audiencia Provincial de Almería a Luis Miguel Columna Herrera.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado.

1.- Luis Miguel Columna Herrera ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el 30.09.1987. Ostenta el nº 670 del escalafón general de la Carrera Judicial cerrado a 31.03.2018.

Entre sus destinos por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión) como juez: Juzgado de Distrito de Guadix (22.10.1987-07.12.1989); y como magistrado: Juzgado de lo Penal núm. 1 de Almería (27.12.1989-19.07.2018) y Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Almería (20.07.2018 a la actualidad).

2.- Por lo que se refiere a las aptitudes de gobierno, el candidato nombrado cuenta con experiencia gubernativa relevante: Fue Decano de los juzgados de Almería en fecha 02.06.2009, hasta su cese el 20.02.2018. Fue también miembro Sala Gobierno del Tribunal Superior Justicia en dos periodos, 2007/10 y 2015/19.

El candidato presenta un programa de actuación que en, en primer término, detalla la situación actual de la Audiencia y de los juzgados a los que extiende su jurisdicción y tras detectar la diversa problemática, realiza unas propuestas de mejora que pueden resumirse en los siguientes puntos:

Primera. Es necesario potenciar la celebración de plenillos entre las secciones penales, dentro del ámbito de Audiencia que permitan una constante unificación de criterios.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Segunda. Acomodar el flujo de entradas al número de resoluciones, acortándose en el mayor caso, el tiempo de respuesta jurisdiccional. Programación de los señalamientos y reparto de asuntos por materias lo que facilitará las deliberaciones posteriores.

Tercera. En la sección primera se precisa de un segundo magistrado/a de refuerzo que complemente a la hasta ahora existente.

Cuarta. Propone formar una sala bis en la sección tercera durante el periodo de enjuiciamiento de la llamada Operación Poniente, que obligará a tres magistrados a estar en la celebración del juicio durante al menos seis meses.

Quinta. Propone que se dé solución a los problemas de la visión de las vistas (sistema Arconte) que permita que cuando la apelación es entregada al ponente, la vista ya esté en su ordenador y no se produzcan retrasos.

Sexta. La creación de un protocolo de conformidades penales que permita reducir la carga de la Oficina Judicial evitando citaciones que no serán de utilidad.

Séptima. Mantener un contacto con los jueces decanos, con visitas periódicas a los distintos partidos para conocer in situ los problemas no sólo de carácter general de cada partido, sino específicamente de cada juzgado. Así como mantener una relación fluida con el Ministerio Fiscal; que permita resolver de la forma más satisfactoria las cuestiones que afectan a ambas instituciones y con los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, sin duda las relaciones institucionales con cualquier Organismo Público han de estar a la altura que una Audiencia Provincial exige.

Octava. Creación de un punto de atención al ciudadano, al que debe ser fácil acceder.

Novena. El candidato realiza una pormenorizada propuesta en materia de medios informáticos, entre dichas propuestas: Se ha de colaborar en el perfeccionamiento y mejora de los programas de gestión procedimental existente, estableciendo los mecanismos de trabajo para ello; la interconexión con otros órganos jurisdiccionales y administrativos que permitan un flujo de datos, aligerando la tramitación; disponer de comunicación con otros órganos administrativos como Instituciones Penitenciarias.

Décima. También se refiere a la mejora en el sistema de archivos judiciales (ya documentales, ya de piezas de convicción).

Undécima. Debe colaborarse desde la Presidencia de la Audiencia Provincial para encontrar un lugar adecuado para la celebración del juicio de la operación Poniente, sugiere que un lugar adecuado sería algún pabellón cubierto de titularidad de la Junta de Andalucía, que en la actualidad se encuentran con un uso muy limitado.

Decimosegunda. Propone la construcción de un nuevo edificio judicial, sede de la Audiencia Provincial (así como de los nuevos órganos unipersonales que se creen y que ya no tienen cabida en la Ciudad de la Justicia) lo más cercano



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

posible a la ciudad de la justicia inaugurada en 2013 y que cuenta con mejores accesos y servicios.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de tres resoluciones, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional:

1ª) Sentencia de la AP de Almería, sección 2ª, de 21/09/2020.

Se trata de un juicio con Tribunal de Jurado realizado en época de pandemia, donde además de la preocupación de guardar las distancias necesarias en todo momento, especialmente entre los miembros del Jurado, desde el punto de vista técnico se reseña que se trataba de un delito de asesinato y un delito de robo con violencia, en el delito de asesinato se planteaba el problema que en la escena del hecho intervienen dos personas, y una de ellas no pudo ser juzgada al haber fallecido en Lituania, con lo que hubo que ser precisos a la hora tanto de establecer el objeto del veredicto para determinar la participación de la acusada.

En segundo lugar, hubo que delimitar porque el estrangulamiento final llevaría a calificar los hechos como asesinato al concurrir la alevosía.

2ª) Sentencia de la AP de Almería, sección 2ª, de 13/10/2020

Se trata de un caso con siete acusados y seis los delitos que fueron enjuiciados. En concreto, además del estudio que se hace respecto de la vulneración de derechos fundamentales alegada por las defensas sobre la nulidad de las intervenciones telefónicas y las entradas y registro practicadas en tres domicilios, se trataba de uno de los primeros casos en los que se debía aplicar en la Audiencia las nuevas normas que respecto del decomiso en supuestos como estos en los que se juzgan entre otros los delitos de blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, tras la reforma del Código penal efectuada por Ley 1/15.

3ª) Sentencia de la AP de Almería, sección 3ª, de 19/12/2017

La relevancia radica en ser el primer caso que se juzgó en la provincia de Almería, y en 2015 no estaban aún delimitadas las actividades que se podían hacer y las que no se podían hacer en los clubs de cannabis, así como cuál era la influencia que podía tener sobre las personas acusadas la normativa autonómica.

En ese momento era reciente la sentencia del Tribunal Supremo que por vez primera se había pronunciado al respecto y ponerla en relación con la normativa que al respecto había aprobado también la Comunidad Autónoma de Andalucía. En segundo lugar, había que determinar si nos encontrábamos ante una asociación ilícita o bien se trataba de una única persona que dirigía el club y el resto no tenían conocimiento profundo de la estructura del club y eran meros empleados.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

4.- Así mismo, el Pleno ha valorado que Luis Miguel Columna Herrera acredita el ejercicio de docencia y otras actividades jurídicas de análoga relevancia, entre las que han de destacarse las siguientes:

Durante los cursos universitarios 1997-1998, 1998-1999 y 2014-2015, fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería, de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Almería en los años 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98 y 1999-2000, y de las cinco últimas promociones de Policía Local de Almería.

También ha ejercido docencia como preparador de opositores a la Carrera Judicial (2015 a 2020).

El candidato nombrado acredita una treintena de ponencias y conferencias en diversos organismos públicos y privados. Igualmente, ha sido director de 2 cursos organizados por el CGPJ, concretamente *"La nueva reforma procesal penal efectuada por la Ley 38/02 y su complementaria, Ley Orgánica 8/02"* (2003) y *"Las reformas del Código Penal"* (2004), ambos en colaboración con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía; también de 2 cursos organizados por la referida Consejería: *"Jornadas sobre la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género"* (2005) *"Los Juicios Rápidos"* (2007).

Todo lo expuesto hace de Luis Miguel Columna Herrera el magistrado más idóneo para el desempeño de la plaza.

Frente a este acuerdo formula voto particular María Concepción Sáez Rodríguez al que se adhieren Álvaro Cuesta Martínez, Rafael Mozo Muelas, Clara Martínez de Careaga García y María Pilar Sepúlveda García de la Torre.

Doce.- Aprobar, por asentimiento, el informe de la Comisión de Asuntos Económicos en relación con los niveles de ejecución del Presupuesto del Consejo de 2020.

Vº Bº Presidente

Secretario General